

Se utilizan diferentes versiones de este mismo tema para ‘controlar’ la calidad del aire y el agua, y se han ideado mecanismos similares para —supuestamente— poner coto al agotamiento de la vida marina mediante la creación de cuotas o derechos de pesca también comercializables.

Una vez que se han creado los mercados iniciales, se abren oportunidades para el desarrollo de derivados (por ejemplo, opciones sobre carbono o futuros de ‘cuotas de captura’ de pesca propuestas) que permiten que las empresas se protejan frente a los precios de estos permisos, cuotas o créditos negociables, o bien especulen con ellos.⁵⁴

La financierización de la naturaleza está impulsada por supuestos ambientalistas, pero orientados al mercado, y por agentes financieros que lo ven como una nueva oportunidad de lucro. Sin embargo, además de los debates en torno a la ética de la fijación de precios y la mercantilización de ‘servicios’ y ‘bienes’ ambientales, cada vez hay más pruebas que sugieren que estas ‘soluciones’ financieras no logran resolver la degradación ambiental y podrían incluso agravar el problema, así como crear nuevas desigualdades sociales al otorgar al sector financiero el control de los recursos comunes.⁵⁵

Por ejemplo, en el caso de la pesca, la gestión de la pesca ‘financierizada’ suele basarse en el despojo —mediante la creación de ‘derechos’ de pesca privatizados— y la exclusión de las comunidades pesqueras de subsistencia. Por último, se teme que puedan desatarse nuevas formas de volatilidad e incluso de crisis a raíz de la expansión de los mercados de derivados de ‘capital natural’.

Las fuerzas que impulsan la financierización

17. ¿Cómo llegó el sector financiero a ocupar un lugar tan preponderante?

La financierización no es algo que sucedió por casualidad. Fueron decisiones políticas —o la falta de ellas— las que permitieron que el proceso de financierización despegara y prosperara a buen ritmo. Aunque la desregulación respondió, en parte, al ‘arbitraje regulatorio’ y las lagunas de las que ya se estaban aprovechando algunas grandes empresas, las políticas de ámbito nacional e internacional también fomentaron actividades y cambios que impulsaron la financierización. Finalmente, la inacción, como la negativa a intervenir en actividades financieras con un posible efecto desestabilizador, ha desempeñado un papel al menos tan importante como la reforma activa de las políticas.

La financierización se vio reforzada, en particular, por las políticas neoliberales.⁵⁶ En las últimas décadas, la atención se ha centrado en eliminar las regulaciones sobre el capital y las grandes empresas. Quienes defienden el neoliberalismo, también han insistido en mantener una inflación baja, en contra del objetivo macroeconómico de fomentar el pleno empleo, habitual en la era keynesiana de la posguerra. La concepción neoliberal ha beneficiado en especial al sector financiero porque la inflación erosiona el valor de los activos financieros.

Esta agenda fue promovida enérgicamente por Gobiernos nacionales (como durante el mandato de Reagan) y por instituciones como el FMI. En el Sur Global, en caso de que no la impusieran las condiciones del FMI, a menudo contó con el respaldo de las élites locales. Al examinar el caso de Argentina, Jiménez observa que la reestructuración neoliberal de la década de 1990 “reflejó una alianza de poder político entre el Estado y el poder financiero transnacional, a expensas de la industria”. Esta alianza propició un auge económico a mediados de la década de 1990, que fue seguido de una quiebra en 2001.⁵⁷

Otros Gobiernos se han resignado a este tipo de políticas económicas, apuntando que tienen poca capacidad de elección en este ámbito. Una vez que se ha producido la liberalización financiera y el capital carece de límites, la autonomía de la política nacional se ve mermada. Los países que no cumplen con los intereses de los inversores son castigados por la ‘fuga de capitales’, que se dirigen a otros lugares para obtener mayores rendimientos, o no pueden acceder a la financiación privada, ya que las instituciones internacionales y las agencias de calificación crediticia dejan de considerarlos ‘solventes’.

Muchos economistas celebran las restricciones que se imponen a las políticas públicas a través de la movilidad del capital. Thomas Friedman, por ejemplo, alude a esta dinámica como ‘la camisa de fuerza dorada’. Desde este punto de vista, la movilidad del capital actúa como un ‘instrumento disciplinario’, que obliga a los Gobiernos a adoptar políticas monetarias y fiscales ‘adecuadas’, como presupuestos equilibrados (que puede que exijan medidas severas de austeridad), una inflación baja, reglamentos fiscales generosos y mercados financieros desregulados.

Aunque parezca irónico, las reglas de austeridad fiscal no se aplican en el caso de una crisis financiera en la que se espera que el Gobierno rescate a las instituciones y a los inversores privados. En realidad, la disciplina del mercado no dicta la cantidad deseada de gasto gubernamental, sino su forma deseada: los presupuestos que prevén fondos para salud, educación o seguridad social, por ejemplo, se consideran cuestionables, mientras que en el caso de una crisis financiera, se espera que el Gobierno vacíe las arcas.

Los rescates de instituciones financieras impuestos por los Estados Unidos y varios Gobiernos europeos después de la crisis de 2008 son buenos ejemplos.

18. ¿Qué regulaciones se establecieron para controlar la financierización después de la crisis financiera mundial?

La financierización está muy integrada en el funcionamiento de la economía política contemporánea. Aunque puede que muchos dieran por sentado que la crisis financiera anunciaría un cambio drástico de políticas y la imposición de restricciones sobre el tipo de prácticas de riesgo que llevaron al derrumbe financiero y al rescate por parte de los contribuyentes, todo sigue fundamentalmente igual.

La novedad más notable ha sido el intento de acordar una serie de pautas que permitan enfrentar el “riesgo sistémico” del sector financiero en su conjunto, en lugar de centrarse en bancos o prácticas concretos. La iniciativa más importante ha sido el Acuerdo de Basilea III, un conjunto de marcos regulatorios globales voluntarios, al que se invita a adherirse a los bancos. Aunque se concertaron en 2010-2011, la fecha de entrada en vigor se aplazó hasta 2019. Las normas se basan, en gran medida, en mejorar el capital que los bancos mantienen en sus balances. Esto significa reducir el apalancamiento bancario (relación entre deuda y capital) y velar por que los bancos dispongan de una mayor proporción de activos de bajo riesgo.

En Europa, inmediatamente después de la crisis financiera, se puso en marcha una iniciativa política para adoptar un impuesto sobre las transacciones financieras que se aplicaría a determinados tipos de valores financieros, así como para restringir el crecimiento de la titulización respaldada por activos. Estas medidas fueron impulsadas, en especial, por el Parlamento Europeo. Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) y el Gobierno británico frustraron sus efectos y ayudaron activamente a reconstruir un mercado de valores basado en activos y otros mercados de valores cuyas transacciones se suponía que se someterían a impuestos.⁵⁸

El sector bancario en la sombra, a pesar de su papel en la crisis financiera, se ha mantenido prácticamente intacto. De hecho, sigue prosperando. Según el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), en 2016, la proporción de activos financieros en manos de instituciones no tomadoras de depósitos alcanzó casi el 50 %. China representa un motivo especial de preocupación: su industria de banca en la sombra tiene un valor de 15 billones de dólares, aproximadamente el 130 % del PIB del país.⁵⁹ En un informe de 2017 sobre la banca en la sombra, el FMI señaló que “el riesgo se ha desplazado hacia los extremos del sistema financiero donde tenemos menos visibilidad y menos instrumentos para aplicar”.

19. ¿Por qué la crisis financiera llevó a que el sector financiero adquiriera más poder?

La financierización solo puede cambiar mediante las acciones de los movimientos sociales que trabajan para transformarla. Si bien han surgido varios frentes de combate, hasta la fecha, nada ha sido capaz de contrarrestar el poder de los bancos oligopolistas, los administradores de activos y los políticos que tanto han ganado con la financierización. El poder de las finanzas se caracteriza por tres aspectos fundamentales.

En primer lugar, el poder directo sobre los legisladores y los reguladores. La industria financiera es enorme, compleja y goza de acceso a recursos financieros e informativos que están fuera del alcance de cualquier otra clase social. En el período previo a las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el sector financiero gastó 2000 millones de dólares —de los cuales, 1200 fueron en aportaciones para campaña—, más del doble que la cantidad donada por cualquier otro sector empresarial.⁶⁰ En un informe publicado en 2016, Corporate Europe Observatory determinó que el sector financiero del Reino Unido destina más de 30 millones de libras esterlinas al año en actividades de cabildeo en Bruselas y emplea a más de 140 cabilderos para influir en la formulación de políticas de la UE.⁶¹ Además de estos recursos financieros básicos, la complejidad del sector financiero le otorga una ventaja informativa con respecto a los reguladores y los responsables de elaborar las políticas. Estos elementos, en su conjunto, hacen que a los políticos les resulte difícil imponer cambios regulatorios que limiten el crecimiento del sector financiero.

En segundo lugar, el poder estructural que mantiene sobre la sociedad. En un contexto de sobreproducción capitalista y disminución de las ganancias —sobre todo en los países de la OCDE—, el crecimiento impulsado por la deuda suele ser la única vía por la que los Gobiernos pueden reunir los impuestos y los préstamos necesarios para financiar el gasto público y generar las tasas de crecimiento suficientes para satisfacer a la ciudadanía. El uso creciente de la deuda significa que, independientemente de lo que los políticos deseen realmente, *necesitan* que la financierización siga en marcha. Esto otorga un gran poder a la veintena de bancos de inversión que dominan la creación de crédito y representa precisamente el motivo por el cual, desde la crisis, han aparecido nuevas vías de especulación.⁶²

En tercer lugar, el poder de infraestructura. La forma definitiva en que las finanzas mantienen su control sobre la sociedad es que los bancos centrales utilizan los mercados financieros privados, en particular el mercado de titulización, para aplicar la política monetaria.⁶³ Eso significa que para ‘controlar la economía’ como debe hacer un Gobierno, este debe contar con instituciones financieras privadas. Esto otorga al sector financiero el poder de oponerse a los cambios.

CASO PRÁCTICO

El cabildeo de Enron

El estudio que realizaron Froud *et al.* sobre el caso de la corporación estadounidense Enron ilustra muy bien cómo la clase política se ha aliado con total impunidad con las empresas para promover estrategias arriesgadas de financierización. Los altos directivos de Enron pertenecían a la élite de Texas y gozaban de contactos estratégicos a escala nacional. Kenneth Lay, el director ejecutivo de Enron, era especialista en cabildeo. Enron realizaba donaciones a los dos grandes partidos políticos estadounidenses. Estos contactos ayudaron a Enron a impulsar la desregulación del sector energético, sobre todo en lo que se refería a las transacciones financieras.

Por ejemplo, en 1993, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) eximió de toda supervisión gubernamental a los derivados energéticos. En aquel momento, la presidenta de la Comisión era Wendy Gramm, que, poco después de tomar esta decisión, abandonó el cargo y, unas semanas más tarde, entró a formar parte del consejo de administración de Enron. Enron también estuvo detrás de una reforma jurídica “que limitó la suma que debían pagar las empresas en concepto de daños en caso de condena”.

Cuando Enron quebró, a fines de 2001, se suponía que las mismas personas que habían recibido generosas ofertas de la empresa debían investigarla por fraude: 212 de los 248 senadores y miembros de la Cámara de Representantes que participaron en los comités para analizar el derrumbe de Enron o la conducta de Andersen (la empresa auditora de Enron) habían recibido donaciones de una o ambas compañías.